

La alianza cruje y el IMSS prende alertas: 2027 ya empezó sin pedir permiso

El tablero político y laboral se movió antes de que comenzara formalmente el siguiente proceso electoral. Morena, PVEM y PT abrieron una disputa por la candidatura de Chihuahua; los nuevos partidos exigieron al INE frenar las campañas anticipadas; el Senado fue acusado de despedir a un trabajador después de sindicalizarse; y el IMSS, pese a alcanzar cifras históricas de afiliación, advirtió que su estabilidad financiera comenzará a enfrentar presiones durante la próxima década. El mensaje es simple: las decisiones que se posterguen hoy pueden convertirse en crisis mañana.

Las elecciones de 2027 todavía no comienzan legalmente, pero la competencia política ya está en marcha.

El primer choque visible apareció en Chihuahua, donde los partidos aliados del Gobierno federal comenzaron a respaldar aspirantes distintos antes de que Morena concluya su proceso interno.

El Partido Verde condicionó su participación en la coalición a que Cruz Pérez Cuéllar encabece la candidatura al gobierno estatal. El Partido del Trabajo respondió con un respaldo abierto a Andrea Chávez. Ambos perfiles pertenecen al mismo bloque político, pero representan estructuras y estrategias diferentes.

La disputa no es un episodio local menor. Chihuahua es una de las 17 entidades que renovarán gubernatura y puede convertirse en precedente para el resto del país.

Morena necesita al Verde y al PT para ampliar su margen electoral y legislativo, pero sus aliados saben que su apoyo tiene valor. El Verde, especialmente, comienza a negociar desde una posición más sólida: tendrá la presidencia de la Cámara de Diputados a partir de septiembre y posee capacidad para inclinar mayorías en decisiones importantes.

La designación de Raúl Bolaños Cacho Cué como probable presidente de San Lázaro confirma ese crecimiento. Morena anunció que respetará el turno del PVEM como tercera fuerza parlamentaria, evitando una confrontación en la Cámara.

El mensaje hacia afuera es de unidad. Hacia adentro, la negociación es mucho más intensa.

En Chihuahua, Ricardo Monreal pidió respetar los tiempos y señaló que los pronunciamientos anticipados alteran el proceso. La advertencia busca impedir que cada partido aliado convierta sus preferencias en condiciones obligatorias.

El problema es que el calendario político ya se adelantó. Los aspirantes recorren territorios, construyen alianzas, aparecen en medios y movilizan estructuras. Nadie quiere reconocer una precampaña, pero todos parecen estar en una.

Precisamente por eso, los nuevos partidos Somos México y PAZ utilizaron su primera participación en el Consejo General del INE para exigir reglas frente a las llamadas “pre-precampañas”.

Su argumento es sencillo: mientras ellos apenas reciben oficinas, recursos y representación institucional, los partidos consolidados ya posicionan aspirantes y ocupan el espacio público.

El INE enfrenta una decisión complicada. Regular demasiado puede ser interpretado como una restricción al debate político; no regular nada puede permitir que la elección comience de manera informal muchos meses antes de los plazos legales.

La discusión no es técnica solamente. Quien controla el tiempo político obtiene ventaja. Y hoy, los partidos grandes corren mientras los nuevos todavía se amarran los zapatos.

Pero la jornada no sólo dejó tensión electoral.

Dentro del Senado de la República se abrió un conflicto que toca uno de los pilares del nuevo modelo laboral mexicano: la libertad sindical.

Rafael García Durán, trabajador de intendencia, buscó afiliarse al Sindicato Nacional de Trabajadores del Senado. La administración legislativa inicialmente desconoció su relación laboral, pero un juzgado federal ordenó reconocerla y permitir su incorporación al gremio.

Días después de que el sindicato notificó oficialmente la afiliación, el trabajador recibió un documento mediante el cual se daba por terminada su relación laboral debido a una supuesta reestructuración administrativa.

El sindicato interpreta la separación como una represalia y exige la reinstalación. También advirtió que podría instalar un plantón frente al Senado e incluso promover una huelga.

La contradicción es difícil de ignorar. El Senado aprueba leyes que reconocen la libertad sindical, pero su propia administración enfrenta acusaciones por despedir a quien ejerció ese derecho.

La cercanía entre la afiliación y el despido no demuestra por sí sola una represalia, pero sí obliga a una explicación sólida. Un argumento genérico de reestructuración será insuficiente si no existe documentación que acredite criterios objetivos, eliminación real de la plaza y ausencia de trato discriminatorio.

El conflicto puede crecer justo cuando el Senado se prepara para renovar su Mesa Directiva y comenzar un nuevo periodo ordinario.

Iniciar sesiones con casas de campaña y trabajadores protestando afuera del recinto no sería precisamente la postal institucional que busca la Cámara alta.

Mientras los partidos disputan candidaturas y el Senado enfrenta cuestionamientos laborales, el IMSS presenta una fotografía más compleja.

El Instituto alcanzó 22 millones 779 mil 704 trabajadores afiliados al cierre de junio, el nivel más alto registrado para ese mes. Durante el primer semestre sumó más de 262 mil puestos.

La cifra es positiva y confirma una recuperación del empleo formal. Sin embargo, una parte importante del crecimiento proviene de la incorporación de trabajadores de plataformas digitales.

Esto no reduce el valor del avance. Durante años, conductores y repartidores laboraron sin acceso suficiente a seguridad social. Su afiliación representa una ampliación de derechos y una nueva fuente de ingresos para el sistema.

Pero conviene distinguir entre creación y formalización. No todos los registros corresponden a puestos recién generados; muchos son empleos que ya existían y ahora ingresan a la estadística formal.

El desafío es lograr que esa incorporación sea permanente y no desaparezca después del Mundial o de los primeros meses de aplicación del nuevo esquema.

La alerta más importante para el IMSS está en sus finanzas.

El análisis actuarial advierte que los ingresos ordinarios serían suficientes hasta 2031. Después de ese punto, el Instituto tendría que utilizar reservas y podría enfrentar un déficit hacia 2036 si no modifica su trayectoria.

El principal factor de presión son las jubilaciones y pensiones, aunque también pesan el envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas, el costo de medicamentos y la demanda creciente de servicios.

No se trata de una crisis inmediata. Tampoco de una sentencia inevitable.

El IMSS dispone todavía de margen para actuar, pero ese margen tiene fecha de caducidad. La formalización laboral, el combate a la evasión de cuotas, la prevención de enfermedades y la mejora administrativa deben convertirse en prioridades financieras, no sólo operativas.

La peor decisión sería esperar a que las reservas comiencen a utilizarse para iniciar la discusión.

La fotografía nacional de este viernes es reveladora.

Los partidos están compitiendo antes de tiempo. Los aliados del Gobierno ya negocian desde posiciones propias. El Senado enfrenta un conflicto por libertad sindical. Y el IMSS muestra que ampliar derechos sociales también exige construir fuentes sostenibles de financiamiento.

La política suele premiar las soluciones inmediatas. Las instituciones, en cambio, pagan caro las decisiones aplazadas.

Por eso, el verdadero tema del día no es únicamente quién será candidato en Chihuahua, quién dirigirá la Cámara de Diputados o cuántos empleos se registraron en junio.

El asunto de fondo es quién tiene capacidad para anticiparse.

Porque 2027 ya comenzó en la política, el conflicto laboral ya llegó al Senado y la presión financiera del IMSS ya tiene calendario. Ignorar esas señales no las hará desaparecer; sólo hará más cara la factura.